

Los recortes sociales ▶ El impacto político y la opinión

Páginas 2 a 4 <<<

Desde que el Govern de la Generalitat aprobó el último decreto de reforma de la renta mínima de inserción (RMI), en agosto del 2011, el programa nos ha llevado a una grave situación de colapso, retrasos y desatención a personas vulnerables. Las nuevas condiciones de acceso las han expulsado del programa y la vinculación del mismo a una partida presupuestaria cerrada —que, al parecer, se ha agotado— comporta de facto la pérdida del derecho subjetivo de toda persona a disponer de unos ingresos mínimos para subsistir.

El hecho de que no se haya previsto ningún otro recurso o programa para los excluidos nos está llevando a situaciones extremas de desamparo y pobreza, alarmantes en una sociedad que dice preservar el Estado del bienestar. La RMI es el último eslabón del sistema de protección social, y reducir las posibilidades de

Análisis

Teresa Crespo

PRESIDENTA DE ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL



El contrasentido de una exclusión

Si se prima la ayuda a quienes pueden volver al mercado laboral se agrava la situación de los colectivos con una peor formación

acceder a ella solamente es aceptable si existen alternativas que permitan asegurar algún tipo de prestación para vivir dignamente.

El Govern ha decidido centralizar el programa en el Departament d'Empresa i Ocupació con el propósito de mejorar la gestión, unificar los expedientes y clarificar los colectivos beneficiarios. Aunque no es lo que ocurre en la actualidad, parece que en un futuro se pretende des-

tinuar la ayuda de forma exclusiva a los perfiles con mayores posibilidades de inserción laboral. Una decisión que, automáticamente, plantea un problema en relación con los colectivos con mayores dificultades competenciales y formativas, que quedarán excluidos de la ayuda. El mercado laboral no los integrará porque requieren procesos de apoyo y seguimiento largos y difíciles que, por lo general, asumen las entidades sociales.

La próxima legislatura los partidos políticos tendrán que cumplir su compromiso con el sector social de reformar la ley de la RMI, y nos gustaría que, junto con la nueva propuesta, no se olvidasen de dar respuesta a todas las personas que carecen de ingresos. Una buena opción sería cumplir el artículo 24.3 del Estatut de Catalunya, que dice que toda persona o familia que se encuentre en situación de pobreza tiene derecho a acceder a una renta que

asegure los mínimos necesarios para una vida digna. En la práctica, la renta mínima de inserción no puede desligarse de la promulgación de una nueva ley de renta garantizada de ciudadanía.

La falta de liquidez y los problemas de tesorería no pueden convertirse en argumento para justificar la reducción de los derechos sociales. Las administraciones deben afrontar la inversión necesaria para combatir y prevenir la pobreza, y eso pasa por incrementar los ingresos con una fiscalidad más justa y redistributiva. Al margen del difícil momento que estamos viviendo, no podemos aceptar el incremento de las desigualdades, ni una pobreza cada día más severa y generalizada. Por solidaridad y para evitar males peores en un futuro, debemos invertir hoy en políticas sociales; de lo contrario, el coste económico y social será muy superior en los próximos años. ≡



▶▶ Cola de personas ante la sede de Benestar Social por la renta mínima de inserción, en agosto del 2011, cuando se reformó la prestación.

El PSC, ERC e ICV exigen que el Govern comparezca por la RMI

▶ Los partidos fuerzan convocar la diputación permanente de la Cámara catalana

▶ El Ejecutivo admite que tendrá que pagar con dinero del previsto para crear empleo

TONI SUST
BARCELONA

La oposición quiere una explicación del Govern después de conocer que tras pagar la nómina de septiembre de la renta mínima de inserción (RMI) prácticamente ha agotado el

presupuesto fijado para la prestación en los presupuestos de la Generalitat del 2012: 100 millones de euros. El PSC, ICV-EUiA y ERC se pusieron ayer de acuerdo para forzar la reunión de la diputación permanente del Parlament, el máximo órgano representativo del Parlament entre

legislaturas, con el fin de que esta vote sobre la posible comparecencia del Ejecutivo catalán para hablar de la situación de la RMI. «Hablamos de las personas que lo están pasando peor, y no puede esconderse bajo una *estelada*», afirmó la diputada del PSC Eva Granados, que recordó que el *conseller* de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, le espetó meses atrás que no estaban recortando la RMI porque lograrían que 6.000 de sus titulares salieran del programa por la vía de encontrar trabajo. La ecosocialista Dolors Camats afir-

mó: «Hoy, gracias a CiU, los catalanes ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Es cierto que hay menos dinero, pero el que llega está mal repartido». «Nos parece escalofriante e indecente que el Govern no dé la cara ¿Dónde están Mena y Cleries?», agregó Camats sobre los titulares de Empresa i Ocupació y Benestar Social i Família.

La petición de los tres partidos de la oposición garantiza que se convoque la diputación permanente, pero como está previsto que esta se reúna el próximo 19, en una semana, para

la aprobación de un decreto, podría aprovecharse la jornada para abordar también la cuestión de la RMI.

Entretanto, el Govern no se pronunció abiertamente respecto de la situación de la RMI ni del traslado de funcionarios de Benestar a Empresa dentro de dos semanas. La idea, según fuentes del programa de la RMI, es que este, que hoy depende de la dirección general de Empresa, pase a hacerlo del Servei d'Ocupació de Catalunya el 1 de enero del 2013.

PRESUPUESTO «NO AGOTADO» // Pero fuentes de Empresa sí hablaron, en concreto para informar a Europa Press de que no consideran agotada la partida de la renta mínima y de que esta asciende en realidad a 130 millones de euros y no a 100 millones. Las mismas fuentes insistieron en que la RMI contaba con dos partidas, la de 100 millones y una de 30 millones prevista para lograr la ocupación de los titulares de la ayuda.

Y esa es exactamente la argucia. El Govern de Artur Mas aseguró que se proponía lograr una reforma de la RMI que propiciara que quienes están en el programa lograsen salir de este, al margen de acabar con un fraude que no se ha demostrado pero cuya denuncia caló en parte de la sociedad catalana. En enero, Mena cifró en 18.000 los titulares que cobrarían la prestación a finales del 2012. Pero el objetivo no se logró.

Los datos que avanzó EL PERIÓDICO el miércoles pasado sobre la evolución de titulares en los últimos 10 meses revelan que su número apenas se ha modificado, y cuando lo ha hecho, al alza, excepto en septiembre, cuando se redujo en un millar, hasta los 23.353 titulares. De enero a agosto, la lista de personas que cobraban la prestación creció en pequeñas proporciones, de 24.311 a 24.451. El plan de empleo anunciado por Mena no tuvo efecto o no se puso en práctica: ni se colocó a nadie ni se gastó un euro. Los 30 millones servirán para pagar la renta. Casi como antes, cuando la partida era abierta y se añadía dinero al *Pirmi* en función de la demanda. ≡